

Documentos



CIDESD

08

Mayo / 2015

Posconflicto y paz: la violencia contra las mujeres y las niñas en escenarios del posconflicto.

Una reflexión desde la realidad cartagenera.

Consuelo Arnaiz P. Investigadora Asociada e integrante del Consejo Asesor de CIDESD

Ahora, cuando parece irreversible el proceso de negociación y se acerca la buena noticia del fin del conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano, estamos analizando con preocupación, desde nuestro accionar en la ciudad de Cartagena, el incremento de la criminalidad urbana y rural y la militarización de la vida cotidiana, como expresiones del conflicto que impactan en los cuerpos y proyectos de vida de las mujeres, especialmente jóvenes, y profundizan su subordinación.

El conflicto armado en Colombia, además de la confrontación histórica que se mantiene en medio de la negociación y genera impactos devastadores en la población civil en zonas de guerra, tiene hoy expresiones y características distintas. Actores diversos generan dinámicas de control en amplias zonas urbanas y rurales. Entre ellos, las denominadas “bandas criminales”, la delincuencia común organizada, el sicariato y los actores armados post-desmovilización incrementan su actuación criminal en diversas regiones. Como afirman algunas investigadoras¹, “con la expansión paramilitar el mapa de la guerra cambió a fuerza de sangre y terror”. En efecto, las ciudades, antes menos implicadas en el conflicto armado, son escenarios cada vez más comunes de intervención de estos actores. El “neoparamilitarismo” invade y

¹Caicedo Delgado Luz Piedad: Dos dinámicas del conflicto armado en dos entornos distintos de la Costa Caribe. En: Tierra y territorio, afectaciones y retos para las mujeres. Fokus y Corporación Humanas, Bogotá 2011.

“militariza”, la vida cotidiana de las personas², de los barrios populares y de las zonas rurales.

La militarización es un proceso por medio del cual una persona, un objeto, una familia, una institución, una cultura, son progresivamente invadidas, controladas por ideas que otorgan al orden, a la fuerza, incluso a las armas, -todos ellos atributos de la masculinidad-, la capacidad de resolver los conflictos y de organizar la vida en común. Esta ideología, esta manera de pensar, tiene cada vez más adeptos en el país, a pesar del proceso de construcción de un Acuerdo para la finalización del conflicto armado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, que avanza en La Habana.

Las dinámicas sociales que impulsan estos nuevos actores armados se expresan en la ciudad de Cartagena a través de niveles preocupantes de criminalidad urbana asociada al microtráfico o narcomenudeo, a los “paga diarios” y préstamos de dinero, venta de servicios de seguridad privada, la extorsión y las amenazas, manejo de redes de prostitución y trata de mujeres, las guerras entre bandas y pandillas por el control de los territorios, la proliferación de “ollas” o “caletas”, los monopolios de negocios ilícitos, los nuevos desplazamientos urbanos, el abuso sexual de niños y niñas... En la mayoría de los casos no son evidentes estructuras militares, y no se logra establecer una relación entre la llamada delincuencia común y las amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos³. La explicación es que la militarización no siempre se produce a través de la guerra convencional⁴.

La militarización se extiende sobre el paisaje social del género⁵. A veces de manera violenta, otras a través de la persuasión e incluso fascinación –especialmente en el caso de mujeres jóvenes-, las mujeres son sometidas al control de varones con pensamiento y práctica militarista. Estos pensamientos y prácticas encuentran terreno abonado en familias, culturas y sociedades patriarcales y sexistas que exaltan y valoran lo masculino y la masculinidad e inferiorizan lo femenino. Por esta razón, estas dinámicas sociales que incrementan la criminalidad y la violencia urbana y rural de manera creciente, profundizan las violencias contra las mujeres urbanas y rurales de todas las edades, etnias y clases sociales, pero especialmente de las mujeres jóvenes que habitan los sectores populares.

Entre los territorios en disputa, objeto de control, están también los cuerpos femeninos. Los nuevos conflictos, dinámicas y actores armados están incrementando y exacerbando la violencia contra las mujeres de todas las edades, pero especialmente jóvenes y niñas en los barrios populares y en las zonas rurales: la violencia física, sexual y psicológica, que en muchas circunstancias conducen al feminicidio –mujeres asesinadas por ser mujeres-. A pesar de contar con legislación que protege los derechos de las mujeres, estas formas de violencia son cada vez más comunes, con el agravante de prácticas aberrantes en aumento (como se ha observado, en los últimos años): desfiguración con ácido, quema de los cuerpos, empalamientos, agresiones

²Enloe Cinthia: ¿Cómo se militariza una lata de sopa? En: Nash Mary y Tavera Susana: Las mujeres y las guerras. Editorial Icaria, pp. 327

³Caicedo Luz Piedad, op. Cit. Pág. 14.

⁴Enloe Cinthia: op. Cit. P. 329.

⁵Ibíd. Pp 329

específicas que configuran formas de tortura en los órganos sexuales, abuso sexual contra niñas y adolescentes y en general explotación sexual comercial de mujeres y prácticas de esclavitud sexual...

Las formas de control ejercidas por estos actores sobre los cuerpos y proyectos de vida de las mujeres oscilan entre el dominio bruto, y la persuasión. Ambas hacen parte de la historia de sometimiento de las mujeres, pero en las actuales circunstancias urbanas, se exacerban tanto en ámbitos privados como públicos, siendo el espacio de la familia el que reporta mayor violencia contra las mujeres, especialmente las jóvenes. A esta exacerbación e incremento de violencia contra mujeres y niñas, pueden estar contribuyendo, en gran medida, los imaginarios y estereotipos sexistas que circulan a través de los medios de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a veces de manera explícita, otras de modo muy sutil.

Algunos grupos de mujeres y niñas son especialmente vulnerables al control de estos actores: las mujeres más empobrecidas, especialmente en situación de desplazamiento que viven en condiciones de mayor precariedad; las mujeres jóvenes cabezas de familia; las lideresas sociales que adelantan procesos de defensa de los derechos humanos de las mujeres; aquellas mujeres que se han empoderado y de alguna manera transgreden, o no obedecen mandatos culturales de género, y son por ello señaladas a través de panfletos (periódicamente reeditados), y castigadas por estos actores que ejercen nuevas formas de terror, en este caso “ejemplificante”, como el control de los horarios y de la sexualidad de las mujeres, las violaciones, el uso de “pasquines” amenazadores y de vehículos que evocan épocas tenebrosas del paramilitarismo, y prácticas de cooptación de lideresas sociales.

La persuasión actúa sobre todo en el caso de mujeres jóvenes urbanas que, fascinadas en muchos casos por los símbolos de poder que ostentan estos hombres (dinero, motos, estéticas corporales, lenguajes...) son atraídas a su mundo y a sus vidas. En muchas ocasiones, y como fruto de esta atracción son manipuladas y usadas como informantes, distribuidoras, vendedoras, compañeras sexuales, señuelos..., en un claro ejemplo de dominación masculina. A esto contribuye el hecho de que en general el microtráfico ocurre en los ámbitos domésticos, que son un territorio culturalmente propio de las mujeres.

La configuración de este nuevo escenario- en el marco de ese *continuum de violencias* que marca las vidas de las mujeres y las niñas en el espacio privado y público-, exacerba, incrementa y en muchos casos modifica la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres y las niñas, con prácticas aberrantes, llegando incluso al feminicidio.

Con toda claridad, diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, iniciativas legislativas, informes producidos a distintos niveles, señalan cómo operan las discriminaciones múltiples; cuando la identidad de género intersecta con la edad y la etnia/raza, las afectaciones tanto físicas como psicológicas producidas por la

militarización de la vida cotidiana, se incrementan. Esto es evidente en el caso de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes afrodescendientes en Cartagena de Indias.

La publicación “Mujeres Jóvenes, Mujeres Habitadas”⁶, realizada a partir de una investigación que se llevó a cabo en las unidades comuneras 2 y 3 de Cartagena, ámbito de incidencia de la asociación FUNSAREP, con amplia participación de mujeres jóvenes vinculadas a los programas de formación de género que desarrolla esta organización social, señala cómo un elemento común en los testimonios de las jóvenes entrevistadas *“la descripción de contextos marcados por la violencia inscrita en la vida cotidiana, una violencia que incide de manera determinante en sus proyectos de vida”*. Es una violencia que limita su movilidad y sus opciones de vida⁷.

Estas situaciones conforman un panorama muy preocupante en una coyuntura marcada por la esperanza de la firma de un acuerdo entre los insurgentes de las FARC y el Estado colombiano, un acuerdo que inauguraría una etapa de posconflicto y construcción de una paz estable y duradera en los territorios. Este acuerdo, que todas y todos deseamos, es un pacto para dar fin a la confrontación armada entre estos actores, pero desafortunadamente no es un acuerdo que ponga fin al patriarcado ni a las relaciones desiguales de poder entre los géneros, aunque sin duda, frenar el militarismo que comporta es un paso importante en esa dirección. Estamos en lo que algunos llaman “los conflictos de la Paz”⁸. El proceso de negociación es sin duda un paso adelante, pero esta guerra ha dejado profundas secuelas, entre ellas, ha exacerbado la violencia contra las mujeres y el control sobre sus cuerpos y sus vidas, como logra demostrar el Informe de la Comisión de la Verdad de Mujeres Víctimas del Conflicto armado en Colombia, llevado a cabo por la Ruta Pacífica de las Mujeres⁹. Ha profundizado, a través de prácticas de control en escenarios propios del conflicto armado, el *“continuum de violencias contra las mujeres”* en todos los ámbitos de su vida.

La etapa posacuerdo plantea la necesidad de un atento seguimiento al comportamiento de la violencia contra las mujeres en ámbitos privados y públicos, en nuevos contextos marcados por nuevos conflictos. Las preocupaciones de la gente, de las mujeres, en esta etapa del posconflicto tienen que ver con procesos de reciclaje de la violencia. Es un hecho comprobado que poderosas bandas criminales y grupos ilegales están llenando en vastas regiones de Bolívar el vacío dejado por los paramilitares, convirtiéndose en un desafío para la seguridad ciudadana y en una opción atractiva para los/las jóvenes de los municipios, carentes de alternativas.¹⁰

Investigaciones llevadas a cabo en los procesos de paz vividos en Centroamérica y otros países del mundo, muestran cómo, en esas circunstancias se generan, o

⁶ Arnaiz Pedrosa María Consuelo: Mujeres Jóvenes, Mujeres Habitadas. Caracterización de las identidades de género en mujeres jóvenes de sectores populares en Cartagena de Indias (Unidades Comuneras de gobierno 2 y 3). FUNSAREP. Colección Educación y Cultura. Cartagena 2010.

⁷ *Ibíd.* Pág. 27

⁸ Montes de María: los conflictos de la Paz. Los desafíos del desarrollo rural en una región que sufrió la guerra. USAID. Revista Semana.

⁹ La Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto armado en Colombia. Ruta Pacífica de las Mujeres. Noviembre 2013.

¹⁰ Montes de María: los conflictos de la Paz. Op. Cit. Pág. 12

profundizan, nuevas formas de violencia y criminalidad posconflicto¹¹. En el desarrollo de estas dinámicas, no sólo no se reducen las violencias contra las mujeres y las niñas, sino que en muchos casos se incrementan y exacerban, en esa dinámica inacabable de la reproducción del “*continuum de violencias*” que se sostiene en la naturalización de la violencia sexista tanto en ámbitos privados como públicos. Hablando del proceso de Guatemala, Luz Mary Méndez¹² explica que: “*después del proceso de paz, no ha habido cambios con relación a la redistribución de la riqueza, tierra, etc., lo que ha agravado los conflictos sociales. Entre las señales alarmantes se halla el crecimiento de la delincuencia y de la violencia contra las mujeres, que se ha convertido en el problema principal para el movimiento de mujeres. Los actores progresistas que participaron en las negociaciones se desarticulaban al pensar que ya se habían logrado los objetivos. Hoy..., todavía queda pendiente retomar la agenda de paz de manera integral y articular la fuerza política y social capaz de llevarla a buen término*”. De hecho, es en esa etapa de reconstrucción de la convivencia, que implica cambios muy profundos en la estructura social, cuando las mujeres tienen un protagonismo especial a través de sus Agendas de Paz, puntualiza Méndez.

Por esta razón, consideramos que la atención a la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas y la lucha contra la impunidad, se convierte en una prioridad en la etapa del posconflicto y de la construcción de Paz. Esto implica cualificar las capacidades de las mujeres para la exigibilidad de su derecho a una vida libre de violencias, con apropiación de todas las herramientas legales y normativas y de las rutas de acceso a la justicia, verdad y reparación establecidas. Implica igualmente rescatar y reconocer la capacidad de resiliencia de las mujeres y su contribución al esclarecimiento de la Verdad y a la reconstrucción de la vida en los territorios, fortaleciendo sus iniciativas organizativas para que la vida fluya y la paz sea una realidad. Y exige el impulso a una participación activa de las mujeres en escenarios de construcción de Paz en los territorios, como lo proponen las distintas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, desde el año 2000 (Resolución 1325).

Se trata, en suma, de fortalecer mucho más la autonomía física de las mujeres, en una etapa marcada por la construcción de una “paz estable y duradera” pero también por la emergencia de actores y contextos marcados por nuevas formas de criminalidad a nivel urbano y rural, que se insertan en antiguas estructuras, y profundizan prácticas ya existentes en diferentes territorios.

¹¹ Wielandt Gonzalo: hacia la construcción del posconflicto en América Latina y el Caribe. Una mirada a la violencia juvenil en Centroamérica. CEPAL. Santiago de Chile 2005

¹² Fragmento tomado de Carmen Magallón: Mujeres en pie de paz. Editorial siglo XXI. Madrid 2006. PP. 153